



COMITÉ PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ACTA RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 46/2019

En Mexicali, Baja California, siendo las catorce horas del día veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado, los integrantes del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Maestro Salvador Juan Ortiz Morales, quien preside el Comité, el Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, el Consejero de la Judicatura, Licenciado Francisco Javier Mercado Flores, la Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura, Contador Público Rosaura Zamora Robles, el Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna, Licenciado Jesús Ariel Durán Morales y la Directora de la Unidad de Transparencia, Maestra en Derecho Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Secretaria Técnica del Comité, para celebrar la sesión extraordinaria 46/2019.

La Secretaria del Comité da cuenta con el quórum de asistencia al Presidente, quien declara su existencia, por lo cual se inicia esta sesión. Acto continuo sometió a sus integrantes el orden del día en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

- I. **Aprobación del orden del día.**
Por unanimidad se aprobó en sus términos.
- II. **Asuntos a tratar:**

PRIMERO. Procedimiento de clasificación de la información y autorización de versiones públicas 18/2019, realizado por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura y por los Titulares de los Juzgados Segundo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria, Mixto de Primera Instancia de San Felipe, Administrador Judicial del Sistema de Justicia

Penal Oral y Jueza Único Penal del Partido Judicial de Mexicali, derivado de las solicitudes de información registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia, con los números de folio 00910519, 00877619, 00874319, 00874419, 00874219 y 00873919, en fecha 05 de septiembre la primera de las mencionadas; 30 de agosto la segunda y el resto el 29 de ese mismo mes de agosto, todas de dos mil diecinueve.

SEGUNDO. Procedimiento de ampliación de plazo para dar respuesta 34/2019, derivado de las solicitudes de información registradas con los números de folio 00954419 y 00954819 en la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha 17 de septiembre del presente año, solicitado por las titulares de los Juzgados Único Penal del Partido Judicial de Ensenada y Único Penal del Partido Judicial de Mexicali.

Vistos los proyectos de resolución presentados por la Secretaria Técnica, el Presidente los somete a consideración de los integrantes del Comité, quienes con las facultades que se le confieren en las fracciones I y II del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 11 y 13 fracción XIII, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, los **aprobaron por unanimidad de votos**, por sus propios y legales fundamentos, por una parte, **la resolución relativa a las clasificaciones de la información de carácter confidencial**, realizadas por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, la Jueza Segundo Penal del Partido Judicial de Tijuana, el Juez Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria, el Juez Mixto de Primera Instancia de San Felipe, el Administrador Judicial del Sistema de Justicia Penal Oral y la Jueza Único Penal del Partido Judicial de Mexicali, quedando en consecuencia, **autorizadas las versiones públicas de los recibos de nómina y de las sentencias de interés de los peticionarios**. Por otro lado, se autoriza la **ampliación del plazo para dar respuesta, solicitada por las Juezas Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada y Único Penal del Partido Judicial de Mexicali, CONSIDERANDO QUE:**

PRIMERO. Con respecto al procedimiento de clasificación de la información y autorización de versiones públicas 18/2019, derivado de las solicitudes de información realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, registradas con los números de folio 00910519, 00877619, 00874319, 00874419, 00873919 y 00874219, tenemos que:

1) Antecedentes:

1.1) En las solicitudes de referencia, se pide: **Folio 00910519**, "(...) versión pública de los recibos de nómina correspondientes al mes de julio de 2019, del (...) Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California. Lo anterior para conocer los conceptos de ingresos y sus montos, así como los conceptos de deducciones y los montos (...)"; en la solicitud registrada con el **Folio 0877619**, se solicita al Juzgado Segundo Penal de Tijuana, las versiones públicas de tres sentencias absolutorias relativas al delito de violación por el periodo de 2008 al 2018, aleatorias, refiriéndose a dos de las cuatro sentencias que al contestar diversa solicitud, manifestó que fueron revocadas; **Folio 00874319**, se pide del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria, las versiones públicas de sentencias dictadas en tres expedientes, así como copia de la sentencia del Tribunal de Alzada que revocó la emitida en uno de dichos expedientes; **Folio 00874419**, se solicita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Felipe, las versiones públicas de dos sentencias condenatorias dictadas en primera instancia y dos sentencias de apelación que modificaron para absolución; **Folio 00873919**, se solicita al Sistema de Justicia Penal Oral, la versión Pública de dos sentencias absolutorias por el delito de violación, dictas en el periodo de 2008 a 2018, a las que dicha autoridad se refirió al contestar diversa solicitud de información; **Folio 00874219**, se solicita al Juzgado Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Mexicali, la versión pública de las sentencias emitidas en tres expedientes de juicios a su cargo.

1.2) Mediante oficios girados, se requirió respuesta a las autoridades competentes. Como consecuencia de ello, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, por oficio número 3271/2019, recibido el 19 de septiembre del año que corre, la Jueza Segundo

Penal del Partido Judicial de Tijuana, por oficio número 0162/2019-P, recibido el 19 de este mes de septiembre; el Juez Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria por oficio 047/2019, recibido el 23 de septiembre pasado, el Juez Mixto de Primera Instancia de San Felipe, por oficio 441/2019-J, recibido el 24 de septiembre del año en curso, el Administrador Judicial del Sistema de Justicia Penal, por oficio SJPO/407/2019, también de fecha de recibido el 24 de este mes y la Jueza Único Penal del Partido Judicial de Mexicali, por oficio número 839/2019, recibido con la misma fecha anterior, **remiten las versiones públicas de los recibos de nómina requeridos y de las sentencias de interés de los solicitantes**, en las cuáles se suprimieron los datos personales que se clasificaron como confidenciales, cubriendo el espacio correspondiente mediante la utilización de asteriscos, la segunda de los mencionados y de una línea negra, el primero y siguientes.

1.3) **Recibidas las versiones públicas citadas**, la Unidad de Transparencia verificó si la supresión de los datos personales se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable. Hecho que fue lo anterior, se turnó el documento y el proyecto de resolución al Comité de Transparencia, para su análisis.

2) **De las versiones públicas elaboradas**. Los integrantes del Comité, atendiendo a los artículos 175 y 177 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por tratarse de solicitudes de acceso en la que se ve involucrada información confidencial, procedieron a determinar si los datos suprimidos en el documento que se analiza, son o no confidenciales, aplicando la prueba de daño a que se refiere el artículo 109 de la Ley local de transparencia y acceso a la información pública, lo que se hizo tomando en cuenta que:

En principio, toda información generada, administrada, adquirida o en posesión de Poder Judicial, por virtud del ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones, es pública, con las salvedades establecidas en la propia Ley. **La versión pública de documentos y resoluciones, permite la consulta de todo interesado en la actuación de**

los órganos jurisdiccionales y administrativos de Poder Judicial, pues se elaboran suprimiendo la información considerada confidencial o reservada, lo que **requiere como acto conjunto a su elaboración, emitir un criterio que la clasifique como restringida al público.**

Por otro lado, considerando que en el caso concreto, el acto de clasificación se hace, como ya quedó asentado, con motivo de la recepción de una solicitud y que ello exige la exposición de **los motivos que la justifiquen y la aplicación de la prueba de daño**, esto implica por una parte, precisar la normatividad que expresamente le otorga el carácter de confidencial a la información omitida y por otra, determinar si con su difusión se causaría un serio perjuicio al interés o intereses públicos tutelados; es decir, la existencia de una expectativa razonable de daño presente, probable o específico.

2.1) Del acto de clasificación de la información. El artículo 106 de la Ley en cita, indica que la clasificación es un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina, que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

En el caso concreto, para efectos del acto de clasificación, encontramos como elementos objetivos, los siguientes:

2.1.1) Las versiones públicas de mérito fueron elaboradas en observancia al marco normativo que rige en la materia, esto es, a lo establecido en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, fracciones VI, y XII, 106, 107, 109 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 4 fracciones III, VI, IX, 10 fracciones IX y XVIII, 55, 73, 77, 82, 87 y relativos del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.

2.1.2) De los propios documentos en estudio, se desprende que **no existe consentimiento expreso de los titulares de los datos personales suprimidos**; esto es, del funcionario y los particulares a los que se hace referencia, lo que resulta necesario **para que éstos puedan ser comunicados a terceros**, como se exige en el diverso numeral 176 del Reglamento de la Ley local de la materia.

2.1.3) En virtud de lo anterior y **como consecuencia de la aplicación de la normativa reseñada**, en la elaboración de las versiones públicas que nos ocupa, **se suprimieron** en los recibos de nómina o reportes de percepciones y deducciones requeridos, **la cuenta bancaria y el banco correspondiente** y, de las resoluciones judiciales solicitadas, **los datos personales de los particulares** participantes de los procesos penales de interés del peticionario, lo cual se justifica atendiendo la obligación legalmente establecida de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, dispuesta por la Ley estatal de la materia, en el artículo 16, fracción VI, **considerando** que es innegable, **que la divulgación de los datos suprimidos representan un perjuicio real y significativo para sus titulares y del interés público de tutelar los datos patrimoniales, la vida privada y la intimidad de los particulares**, ya que se trata de información que no es de interés general; es decir, los datos omitidos se refieren a: número de cuenta, nombres de los acusados y ofendidos, apodos, edades, origen, estado civil, domicilios, ocupación, religión, ingresos, nombres de familiares y de testigos, cantidades, que de acuerdo a la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, **información de carácter confidencial**, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la que en su artículo 4, fracción XII, establece que se **entenderá por información confidencial: La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; la que se refiere al secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; así como aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados**

siempre que tengan el derecho de entregarla con ese carácter; por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos que así lo contemple la Ley General o la presente Ley”, lo que se complementa con lo dispuesto en el precepto normativo 172, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que a la letra reza: “**Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificado o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosa, filosófica, política o de otro género; los referidos a las características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o familiar, o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental, datos laborales, idioma o lengua, escolaridad, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, saldos bancarios, estados de cuenta, números de cuenta, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, buró de crédito, seguros, afores, fianzas, tarjetas de crédito o de débito, contraseñas, huellas dactilares, firma autógrafa y electrónica, códigos de seguridad, etcétera**”.

2.1.4) De la prueba de daño.

Atendiendo a los diversos numerales 175 y 177 del Reglamento de la Ley estatal de la materia y considerando que la clasificación se hace con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado, se procede a la exposición de los motivos que la justifiquen, mediante la aplicación de la prueba de daño, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley estatal, en la Ley General de Transparencia, el Reglamento de la Ley local y los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y demás disposiciones aplicables. En primer lugar, resulta pertinente citar el artículo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración (de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que indica que se entenderá por *"Prueba de daño: la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla"*.

Así las cosas y, dada la obligación de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de información lesiona un bien jurídico tutelado por tratarse de información concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable y que el daño que puede producirse con su publicidad, es mayor que el interés de conocerla, **se determina que al tratarse de datos personales de carácter confidencial protegidos por la Ley y que no se cuenta con la autorización de los titulares de los mismos, para su entrega o divulgación, los datos que se omiten deben clasificarse como confidenciales y restringir su acceso.**

Efectivamente, con la aplicación de la prueba de daño, como sujeto obligado se debe justificar conforme al artículo 109 de la Ley de transparencia estatal, que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o de la seguridad nacional. A este respecto cabe decir que liberar la información de la institución y cuenta bancaria, así como de los datos que identifican o hacen identificables a los sujetos privados que intervienen en los procesos de interés para el solicitante, **representa un riesgo real de injerencia de toda índole en sus vidas privadas, no autorizada, de ahí que no pueda liberarse la información, privilegiando el derecho a la intimidad de los particulares;** II. El riesgo o perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. Del análisis del punto anterior, se advierte que **el daño que se pudiese causar a los particulares al divulgar sus datos personales, supera el interés público de que se conozcan,** pues no se puede suponer ningún interés público de liberarse los mismos, por lo que la clasificación de confidencialidad debe persistir, pues se reitera, que no se cuenta con el consentimiento de los particulares para la liberación de sus datos; III. La

limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. En este caso concreto, la limitación al derecho de acceso a la información es proporcional a la protección de la intimidad de los terceros y es el único medio para evitar el perjuicio, pues frente al marco constitucional vigente, en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad debe dar igual tratamiento en la protección de los derechos fundamentales, tanto del solicitante de la información como de los sujetos de quienes se deben proteger sus datos personales.

3) De la aprobación del acto de clasificación y autorización de las versiones públicas elaboradas. En virtud de lo fundado y motivado en los apartados anteriores, los integrantes del Comité, por unanimidad **ACUERDAN: Aprobar la clasificación de la información de carácter confidencial, consistente en el nombre de la institución y número de cuenta bancaria en la cual se deposita la remuneración del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, así como los datos personales de los sujetos que aparecen en las sentencias de interés de los peticionarios, relativos al nombre de los acusados y ofendidos, apodos, edades, origen, estado civil, domicilios, ocupación, religión, ingresos, nombres de familiares y testigos, de lo cual derivan las versiones públicas elaboradas por el Jefe de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, la Jueza Segundo Penal del Partido Judicial de Tijuana, el Juez Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria, el Juez Mixto de Primera Instancia de San Felipe, el Administrador Judicial del Sistema de Justicia Penal Oral y la Jueza Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Mexicali; por ende, éstas quedan autorizadas por las razones y fundamentos expuestos con anterioridad.**

SEGUNDO. En cuanto al procedimiento de ampliación de plazo para dar respuesta 34/2019, derivado de las solicitudes de información, registradas con los números de folio 00954419 y 00954819, en la Plataforma Nacional de Transparencia, encontramos que:

1) Mediante las solicitudes de referencia se pide: **Folio 00954419**: " Solicito los asuntos ingresados en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por los delitos de Violación sexual - Abuso sexual -Hostigamiento sexual - Aborto -Incesto -Acoso sexual -Feminicidio -Trata de personas -Secuestro -Homicidio - Homicidio por parentesco -Tentativa de violación - Lesiones -Amenazas -Violencia familiar", información que pide desagregada por sexo, año y de ambos sistemas de justicia. Igualmente solicita el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas, por el mismo periodo, respecto a los mismos delitos y con las mismas características ya señaladas; **Folio 00954819**: "Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de tentativa de violación en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la víctima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado".

2) Admitidas a trámite las citadas solicitudes, la Unidad de Transparencia inició la búsqueda de la información, requiriendo de ella a las autoridades competentes en el estado.

3) Ante el requerimiento hecho, la Jueza Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada, por oficio 254/2019-J, recibido el 24 de septiembre de los corrientes, con respecto a la información requerida en los **Folios 00954419 y 00954819**, solicita una ampliación del plazo para otorgar respuesta, por DIEZ DÍAS hábiles adicionales a los ya concedidos, argumentando el cúmulo de trabajo y escaso personal administrativo con el que cuenta y por estar próxima la visita ordinaria de inspección, fundando su petición en el artículo 125 de la Ley de Transparencia, igualmente, la Jueza Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Mexicali, por oficio 835/2019, recibido el 20 de septiembre pasado, solicita ampliación de plazo de respuesta, manifestando la necesaria búsqueda exhaustiva de los datos en cada uno de los libros correspondientes a los extintos juzgados cuyas causas penales fueron concentradas en ese órgano jurisdiccional, para posteriormente realizar una revisión de lo que se peticiona, con apoyo del sistema penal de informática y así estar en posibilidad de remitir la información solicitada.

4) Vistas las razones vertidas por los Titulares de los juzgados citados, este Comité las estima suficientes y justificadas para conceder la ampliación del plazo solicitado, considerando que en el caso concreto habrá de atenderse lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley estatal de la materia, que reza: *"Toda información pública, generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo cual se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos posibles"*, por lo que resulta pertinente que los órganos jurisdiccionales mencionados, realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida y que esté disponible y previo el análisis de su contenido, determine la posibilidad de entregarla por ser pública, en su caso mediante versiones públicas elaboradas conforme a la Ley de la materia y demás ordenamientos aplicables, a fin de respetar y colmar el derecho del acceso a la información que tiene el peticionario; o bien, en su caso declarar la inexistencia de la información requerida, atendiendo para ello los imperativos establecidos en los artículos 12, 13, 14, 131 y 132 de la citada Ley, sin olvidar que se presume que la información debe existir, si se refiere a las facultades, competencias o funciones de dicho órgano y la obligación que tiene como sujeto obligado por la Ley de documentar todo acto que derive del ejercicio de dichas facultades, competencias o funciones, o demostrar lo contrario como se asienta en el artículo 14 mencionado.

Hecho el estudio anterior, el Magistrado Presidente somete a votación de los integrantes del Comité el proyecto de resolución en estudio, quienes **ACUERDAN**: Que las razones y circunstancias que motivan las solicitudes de ampliación de plazo, se consideran suficientes y justificadas, conforme a lo establecido por el artículo 125 de la Ley de la materia, que establece: *"La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de diez días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento"*, por lo que es de aprobarse la ampliación del plazo solicitado por las titulares de los Juzgados Único Penal de los Partidos Judiciales de Ensenada y Mexicali, hasta por diez días, contados a partir

del día siguiente hábil al vencimiento del plazo original para otorgar respuesta por este Sujeto Obligado, a fin de que dentro del plazo ampliado, se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de aquella información que esté disponible para colmar el derecho de acceso de los peticionarios a los datos solicitados y, previo su análisis, se determine la posibilidad de entregarla por ser pública, observando para ello la normativa de protección de datos personales, por conducto de la Unidad de Transparencia, la que recibirá la información, la procesará y entregará al solicitante; o bien, declare en su caso su inexistencia. Lo anterior atendiendo para ello los imperativos establecidos en los artículos 12, 13, 14, 131 y 132 de la citada Ley, como ya quedó establecido anteriormente.

Notifíquese y entréguese copia de esta acta a los peticionarios de las solicitudes de información registradas con los números de folio 00910519, 00877619, 00874319, 00874419, 00873919 y 00874219, junto con la copia de la respuesta y las versiones públicas de la información de interés de los solicitantes, por conducto de la Unidad de Transparencia. Igualmente deberá entréguese copia de esta acta y notificarse a los peticionarios de las solicitudes registradas con los números de folio **00954419** y **00954819**, todos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

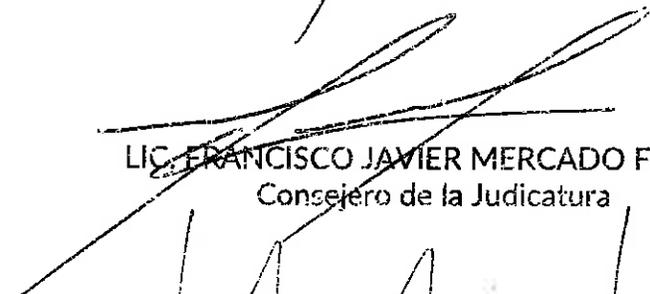
Notifíquese vía correo electrónico al Jefe de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, a los Titulares del Juzgado Segundo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Juez Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria, Juez Mixto de Primera Instancia de San Felipe y Jueza Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Mexicali y Administrador Judicial del Sistema de Justicia Penal Oral, con respecto al resultado del procedimiento de clasificación de la información como confidencial realizada por dichas autoridades y la autorización de las versiones públicas elaboradas relativas a los recibos de nóminas y las sentencias de interés de los peticionarios. Asimismo, notifíquese la **autorización de la ampliación del plazo para dar respuesta a las Juezas Único Penal de los Partidos Judiciales de Ensenada y Mexicali**, para su conocimiento y fines legales correspondientes, haciéndole saber del nuevo plazo que tienen para remitir las respuestas requeridas.

Sin otro asunto que tratar, se cierra esta sesión, siendo las catorce horas del día veinticuatro de septiembre de 2019.



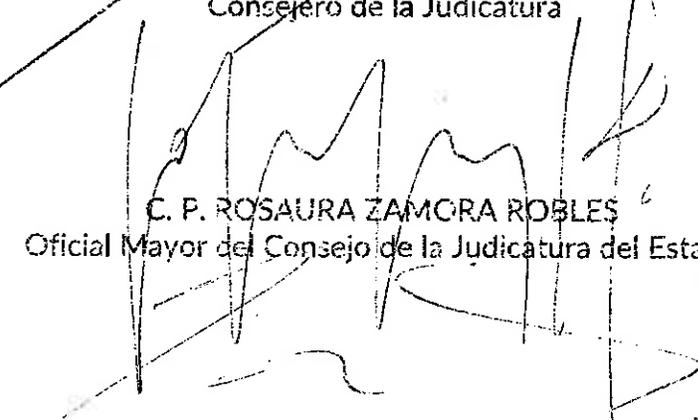
MAGISTRADO SALVADOR JUAN CORTIZ MORALES
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado

MAGISTRADO ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LÓPEZ
Adscrito a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia

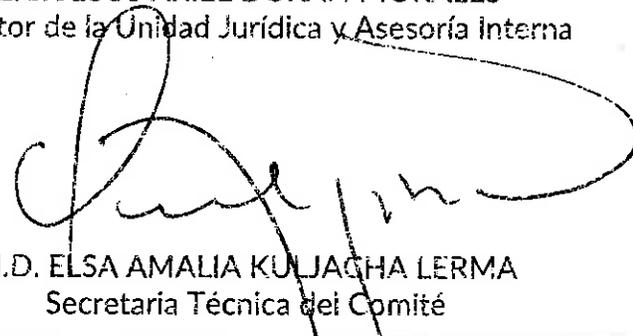


LIC. FRANCISCO JAVIER MERCADO FLORES
Consejero de la Judicatura

C. P. ROSAURA ZAMORA ROBLES
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura del Estado



LIC. JESÚS ARIEL DURÁN MORALES
Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna



M.D. ELSA AMALIA KULJAGHA LERMA
Secretaria Técnica del Comité